

La soberanía en los tiempos del gas: territorialidades y tácticas en el sureste boliviano

*Bret Gustafson***

Resumen

Partiendo de una visión etnográfica, el ensayo hace un recuento de los conflictos sobre la TCO Guarani Alto Parapetí, generando reflexiones sobre las relaciones emergentes entre el gas, la soberanía, el Estado y los proyectos territoriales indígenas. El autor argumenta que los conflictos en Alto Parapetí escenifican dos momentos de transformación de soberanía: el primero, con el desmantelamiento parcial de los poderes locales (hacendados y sus redes) mediante la movilización de cuerpos indígenas resignificados como ciudadanos sacrificables y, el segundo, con la movilización de colectividades e imaginarios indígenas que, frente a la violencia colonial del pasado y del presente, buscan articular nuevas visiones territoriales al proyecto de refundar la soberanía (pluri) nacional

Abstract

From an ethnographic perspective, this paper reviews the conflict TCO Guarani in Alto Parapetí, presenting reflections about the emerging relationships between gas, sovereignty, the State and indigenous territorial project. The author argues that the conflicts in Alto Parapetí depict two different transforming scenarios regarding the sovereignty: First the partial removing of the local power (feudal and its network) through mobilization of indigenous as sacrifice-able citizens; and second, with collective mobilization of indigenous as sacrifice-able citizens; and second, with mobilization of indigenous groups and transforming their collective-imaginary, challenging the colonial violence both in the past and present time, and searching for articulation of new territorial vision with re-founding the pluri-national project of sovereignty.

* PhD en Antropología Social de la Universidad de Harvard. Actualmente es catedrático de Antropología en la Washington University en St. Louis.

Introducción¹

Entre el esfuerzo estatal de construir soberanía hegemónica y los esfuerzos de los movimientos de defender diversos proyectos territoriales, el gas genera transformaciones en la práctica de ejercer soberanía en Bolivia. Examinamos esta dinámica mediante unas reflexiones sobre un episodio central en los conflictos de los últimos años, el caso de la TCO Guaraní Alto Parapetí. El caso tiene de todo: el drama de hacendados gringos desafiando al Estado, tiroteos al estilo vaquero, un ataque de pueblerinos y sus agregados matones a una caravana Guaraní pacífica, la reversión de tierras, la liberación de familias esclavas, procesos judiciales inacabados, traumas sociales latentes, y un megacampo de gas (Incahuasi) del cual nadie dice mucho. El Alto Parapetí fue un eje clave en el tire y afloje entre el gobierno y la oposición durante el primer gobierno de Evo Morales. Es también un eje clave en la historia del pueblo Guaraní, que desde mucho antes del gas y del MAS viene reconstruyendo su propio proyecto de reconstituir su territorio histórico.

Sugiero que los conflictos desatados, las formas en las cuales el Estado y el movimiento los encararon, y la naturaleza de la oposición ganadera, ilustran dos momentos de transformación de soberanía: primero, se vio el desmantelamiento parcial de poderes locales (hacendados y sus redes) mediante la movilización de cuerpos indígenas resignificados como ciudadanos sacrificables. Una triangulación de tácticas (movimiento, ley de Estado,

1 Este artículo se basa en entrevistas llevadas a cabo en Camiri y Cuevo en agosto de 2008. También se basa en vídeos, audio, documentos, fotografías, reportajes de prensa, y correos electrónicos. Agradecemos a compañeros Guaraníes anónimos, en especial al Kumbay Kañandari Kañani, a la Asamblea del Pueblo Guaraní y a unos periodistas anónimo/as muy querido/as por facilitar entrevistas y testimonios. Agradezco al Viceministro Alejandro Almaráz y a Martín Bazarco por proporcionar documentación en La Paz. Gracias a Alejandra Domic por la traducción y a Leila Mokrani y Umbrales por la revisión. Conversaciones con Nicole Fabricant, Ivonne Farah, Gastón Gordillo, Benjamin Kohl, John-Andrew MacNeish, Wilfredo Plata, Ximena Soruco, Fernanda Wanderley y Miguel Urioste ayudaron a aclarar las ideas. La investigación fue apoyada por el Departamento de Antropología, Universidad de Washington en St. Louis, EEUU. El autor es el responsable del contenido y no representa a las organizaciones o personas involucradas.

público transnacional) refleja la debilidad del MAS en su primer período de gobierno y demuestra nuevos tipos de intercambios tácticos, de los cuales surge la soberanía como articulación con los movimientos. Segundo, se movilizan colectividades e imaginarios indígenas que, frente a la violencia colonial del pasado y del presente, buscan articular nuevas visiones territoriales al proyecto de refundar la soberanía (pluri) nacional. Esta doble articulación –con la ley del Estado y con sus visiones territoriales propias–, hace del conflicto un instrumento que paradójicamente forja dos procesos paralelos y nuevos de ejercer soberanía como una relación de intercambio entre la del Estado y la de la nación Guaraní. Visto así, el caso revela las tensiones éticas y políticas del modelo extractivista-plurinacionalista:² ¿Cómo se articulan las presiones extractivistas con los proyectos históricos de los pueblos indígenas? ¿Será que el gas viabiliza nuevas soberanías que rompen los esquemas del colonialismo? o, ¿El caso Parapetí fue solamente una táctica para consolidar la hegemonía estatal y entablar un intercambio desigual entre el Estado y el pueblo Guaraní, para luego dar paso a una situación donde el gas es el soberano absoluto?

La emboscada

La noche del 13 abril de 2008, bajo una llovizna fría y en medio de un caos de gritos y disparos, ganaderos armados arrastraron al abogado Guaraní Ramiro Valle Mandepora hacia la plaza del pueblo de Cuevo.³ Lo habían separado de un centenar de Guaraníes, quienes se encontraban en una caravana de vehículos atascada en la entrada del pueblo. Allí mujeres, niños y hombres también sufrían una lluvia de piedras y golpes de pobladores de Cuevo quienes se habían parapetado al lado del camino. Los guaraníes acompañaban a funcionarios de la reforma agraria para iniciar el saneamiento del territorio llamado Alto Parapetí.

2 Sobre la paradoja del discurso pluri-ecologista-socialista y la fiebre extractivista ver por ej. Acosta, 2009.

3 Las citas de Ramiro Valle Mandepora fueron obtenidas del Observatorio de Derechos Humanos y el documento presentado por Valle Mandepora a la policía, por los cuales agradecemos al Viceministerio de Tierras. Ver también Marcostv (2008).

Habían venido desde la ciudad de Camiri de ida a Itakuatia, una comunidad dentro de la zona de Alto Parapetí, una de las comunidades libres en medio de varias comunidades ‘cautivas’ por la deuda a los patrones. Más allá de implementar la nueva ley agraria, los esfuerzos para sanear la TCO se veían como el camino a la liberación para esta gente, efectivamente esclava. Entre ellos iba el mismo Vice-Ministro de Tierras, Alejandro Almaráz, quien se encargaría de iniciar las actividades catastrales. En esos días, las dos entradas a la zona, una por el norte y la otra por Cuevo, estaban bajo un bloqueo ganadero. Los Guaraníes y las autoridades sabían esto, pero su intento –como lo expresaron después– era evadir pacíficamente el bloqueo. Ahora, atrapados en sus camiones en la entrada de Cuevo, sin responder con su propia violencia, buscaron solamente salir de la emboscada y de la pedrada.

Los ganaderos golpearon ferozmente al abogado. Lo patearon y lo pegaron con cinturones y azotes, atándolo a un poste en la plaza. “Me castigaron como a Jesús”, dijo él más tarde. En la plaza, los insultos racistas acompañaron a golpes y patadas:

“Me amenazaron de muerte, me decían que me iban a cortar mis testículos... todos destilaban odio y racismo...[y agarrándome] del cuello [un ganadero] intentó ahorcarme. Mi persona a partir de ese momento prácticamente perdiendo el conocimiento...ya no podía respirar por los golpes recibidos y estaba

Según testigos, el que dirigía los ataques fue uno de los grandes hacendados, Mario Malpartida, un tipo con ojos de gallo medios chuecos y una barriga de olla. Mientras él golpeaba al abogado, le maldijo por aliarse con el MAS. Según Valle Mandepora y otros testigos, algunos profesores y profesoras del colegio –también integrantes de la estructura de poder local– se unieron al ataque gritando, “¿Quieres ser educado? ¡Así te vamos a educar!” Este lenguaje racista y patriarcal de subyugación colonial fue dirigido hacia un indígena “alzado” considerado traidor a la región, subvertor de un orden social basado en la jerarquía étnica-racial y de clase. En el lenguaje local, le habían dado *huasca*.⁴

4 El látigo, huasca o chicote, es parte de la indumentaria tradicional del hacendado. Se habla de “dar huasca” en relación a varias violencias patriarcales, el abuso doméstico de la mujer, la disciplina de los niños y el control de trabajadores rurales indígenas.

Imágenes de la espalda de Ramiro, expuesta para mostrar las marcas de los azotes, circularon por Internet en los siguientes días. Además de los azotes, más de dos docenas de guaraníes y sus acompañantes, incluido el director nacional de Reforma Agraria, fueron heridos por piedras y palos. Otras imágenes mostraron los cuerpos morotados y cabezas sangrientas de varios guaraníes y una periodista, Tanimbu Estremadoiro, quien los acompañaba y quien también sufrió el asalto personal.

Aquí en el oriente, la huasca se aplicaba tradicionalmente como un enunciado de la gramática colonial de control punitivo del cuerpo indio, un cuerpo visto como sujeto legítimamente punible por naturaleza. Tales azotes a los peones guaraníes por ganaderos *karai* (criollos), al lado de las violaciones rutinarias de las mujeres guaraníes y asesinatos impunes de peones que se arriesgaban a contradecir al patrón, fueron la ley cotidiana desde muchos años atrás en las haciendas del Chaco. Sin embargo, aquí en medio de los conflictos nacionales, la *huasca* salió del monte hacia la plaza de un pueblo provincial. Desafió así no solamente el movimiento guaraní, sino al Estado, ejerciendo un especie de soberanía *de facto*, auto-adjudicándose la legitimidad para castigar y controlar a sujetos en un territorio dado. En una entrevista con Alejandro Almaráz unos días después, la alcaldesa de Cuevo se encogió de hombros frente a las acusaciones de que los Cuevoños torturaron al abogado. Según ella, fueron no más “algunos chicotazos” y una simple “confrontación,” ni tortura ni emboscada. Según ella y otros participantes de Cuevo, el ataque a los guaraníes fue una legítima defensa del “territorio” de Cuevo en contra de la agresión y la acción ilegal del Estado. “¿Quiénes entran de noche?” le preguntó a Almaráz, “las personas delincuentes...los ladrones, ¿no es cierto?”⁵ Criminalizaron así a los guaraníes –y al Estado– legitimándose como soberanos dentro de su municipio, con un pie dentro y otro fuera de la ley. Los significados en disputa del evento se encuentran en el centro de la lucha sobre la soberanía territorial y el orden post-neoliberal en Bolivia.

5 Entrevista con la alcaldesa de Cuevo proporcionada por el Viceministerio de Tierras. Ver también El Deber (2008a, b).

Soberanía y territorialidad en tiempos de gas

El gas natural es factor estructurante de territorialidades nuevas. Conlleva potencialidades progresistas y destructivas (De la Fuente Jeria, 2005). Ejerce influencias tecno-políticas por sus características físicas y las exigencias de extracción, control y transporte (Barry, 2006; Kaup, 2008). Ejerce impactos socio-políticos mediante la redistribución y las externalidades de la corrupción, violencia, desposesión o centralización del poder (Karl, 1997). Genera impactos culturales por la producción de nuevas expectativas y reconfigura el imaginario mismo del Estado como algo cuasi-mágico dotado con nuevos poderes de desarrollo espectacular (Coronil, 1997; Apter, 2005; Gustafson, 2008). Todo tiene características territorializadoras, así que gobernar en tiempos de gas es a menudo reducirse a la lucha de gobernar el gas donde priman las tensiones territorializadoras que crea.

Estos impactos se articulan con historias pre-existentes vinculadas a los legados de colonialidad, el corporativismo y las reformas neoliberales. Se genera así dinámicas nuevas en las formas *de jure* y *de facto* de ejercer soberanía como expresión de la administración territorial. La uniformidad de la ley y del territorio proyectado como el objetivo del proyecto nacionalista se ve de hecho complicado –sino minado– por estos impactos variados del gas en el terreno. Para la etnografía, la atención se dirige a lo que pasa a los seres y los espacios de la vida cotidiana.

Hansen y Stepputat (2006) sostienen que la soberanía debe considerarse como una “forma de autoridad provisional y siempre emergente fundada en la violencia y destinada a generar lealtad, miedo y legitimidad.” Esta formulación sigue la noción de Agamben (1998) de la “nuda vida” (*bare life*). Refiere así a los sujetos quienes pueden ser asesinados (o castigados) con impunidad por un actor –sea o no el Estado– que ostenta el poder de decir cuáles sujetos están dentro y cuáles fuera de la ley, es decir, quién vive, y quien muere sin pena ni castigo. Este enfoque sobre la soberanía requiere examinar de cerca las prácticas y relaciones –como entre hacendados y peones– donde se procura la incorporación, la exclusión o la regulación diferenciada de sujetos (cuerpos) en un territorio dado.

Durante mucho tiempo, las marcas del azote y las violaciones de mujeres, tal como la mirada racista moderna, señalizaba así a los sujetos Guaraníes como legítimamente excluibles, es decir, *nuda vida*. Matar a uno de estos sujetos no fue, entonces, ni crimen ni sacrificio, porque su vida carecía de subjetividad política, o como dicen los Guaraníes, “valían menos que una vaca”. Esta soberanía opera como una política de la muerte (para Agamben, *thanatopolítica*). Es acompañado en tiempos modernos con otras formas de ejercer soberanía mediante el cuidado disciplinario de los cuerpos como seres biológicos (para Foucault [1976], *biopolítica*). En pleno siglo XXI, mientras las reformas neoliberales buscaron implementar nuevas tácticas biopolíticas (con educación, por ejemplo, Gustafson, 2009), seguían operando en ciertos espacios los poderes *de factos* con formas de soberanía colonial basadas en una violencia de la esclavitud, tácitamente aprobado por el Estado.

Los procesos actuales de reconstruir soberanía en el Estado plurinacional pueden reproducir estas lógicas de cultivar cuerpos individuales o de excluir a cuerpos y colectividades. ¿Pero, pueden, siguiendo a Agamben, emerger formas nuevas de ejercer poder que no sea de sangre y muerte? Lo que está ocurriendo en el caso de Alto Parapetí se puede ver de dos formas: uno, la ruptura de una vieja modalidad de *thanatopolítica* orientada a la extracción de mano de obra y bienes agrícolas y la apertura de una posibilidad; o dos, la mera transición táctica hacia la recuperación de nuevas formas de bio- y thanato-política reorientado al favor de la extracción del gas. Por una parte, se muda una relación de intercambio colonial (entre Estado y hacendados) a otro descolonizador (entre Estado y movimiento Guaraní). Esta soberanía como intercambio –y no sólo como bio- o thanato-política– ofrece la posibilidad de una series de transformaciones socio-territoriales mayores, de articulador de pluralidades (Prada, 2007), si no se desintegra en el prebendalismo rentista (*rentier*).

Así se pone a prueba la capacidad del Estado para redistribuir recursos (o costos) derivados de la extracción y exportación del gas. Pero la “maldición de los recursos” trae riesgos. Viendo Nigeria, donde el rentismo petrolero domina la lógica de la soberanía nacional, la re-territorialización no contribuyó al *buenvivir* ni a la articulación progresista de pluralidades, sino a una localización de intereses, la multiplicación de jurisdicciones locales y la

tribalización de ciudadanía. Se fortalece el poder central que controla la renta (y el aparato militar) mientras las zonas petroleras (como la Delta Níger) se convierten en regiones gobernadas por las acciones de las empresas (como Shell) y el Estado, cuya cara es predominantemente militar (Zalik, 2009). Según Watts (2004) –y comentaristas bolivianos como Andrés Solíz Rada (2007)– se desmantela así la conciencia nacional y se fragmenta la posibilidad de construir soberanía democrática. Esta petrolificación de la soberanía –o en el caso de Bolivia, su posible *gasificación*– generaría soberanías *de facto* que borran del mapa cualquier otra territorialidad utópica alternativa.

Pero discrepando con Watts y Solíz Rada, el proyecto de la plurinación boliviana se distingue de casos como Nigeria por las dimensiones diferentes de las historias indígenas y populares en el país. No compartimos el temor del reconocimiento de los pueblos indígenas, pues el riesgo de la *etnicización* en Bolivia se ve moderado por varias razones. Pero el riesgo de la *gasificación* hacia un nacionalismo excluyente (al estilo boliviano post-1952), o su par, un neoneoliberalismo autoritario (al estilo peruano o colombiano actual) es bastante real. ¿Existe la capacidad del gobierno y de los movimientos para balancear las presiones extractivas y las utopías históricas para buscar articular pluralidades sin nuevas exclusiones? Más que respuesta, lo que sigue ofrece reflexiones.

La demarcación de Alto Parapetí

La Ley INRA de 1995 concedió a los pueblos indígenas derechos a TCOs (tierras comunitarias de origen). Durante la última década, las organizaciones indígenas y sus ONGs aliadas participaron en conflictivos procesos para lograr títulos, resultado del cuál vemos las TCOs establecidas por todo el mapa nacional. En el territorio Guaraní, el Alto Parapetí, a pesar de ser una zona tradicionalmente Guaraní, nunca entró en el proceso por la resistencia de los ganaderos.⁶ Con el proyecto del MAS y los movimientos para refundar el Estado, se acelera la reforma. La ley del 2006 amplió las disposiciones para la titulación y el control centralizado del proceso y de la facultad para definir las tierras sujetas a

6 Ver Hernaiz (2002); Valdez Romero y Rojas (2003). Con respeto a la Reforma Agraria desde 2005, Urioste (2009).

la redistribución. Con la nueva Constitución, se crea la autonomía indígena (Territorios Indígenas Originarios Campesinos, o TIOCs). Ahora los pueblos esperan un avance hacia la auto-determinación. Pero entre la política y las expectativas hay mucha distancia. La nueva ley agraria no desafía radicalmente la propiedad privada y, a pesar de la defensa de un nuevo concepto de la auto-determinación, la ley también es parte de un instrumento no sólo de derechos sino de geopolítica, útil para dismantelar los poderes locales (en este caso enraizados en la posesión ilegal de tierras) (Hernaiz, 2002; Gustafson, 2008; Garcés, s/f). Zonas como Alto Parapetí son sitios donde se articula una agenda territorial Guaraní con una agenda estatal de rehacer el poder.

Dos rasgos históricos de Alto Parapetí –el gas natural y la esclavitud humana– facilitaban y complicaban esta articulación táctica. Ahí está el megacampo Incahuasi, donde opera la empresa francesa Total, uno de los diez mayores descubrimientos mundiales de gas entre 2000 y 2005 con el equivalente de más de 1.300 millones barriles de petróleo. Bajo las leyes vigentes, las regalías de Incahuasi beneficiarían a varios municipios y dos departamentos, Santa Cruz y Chuquisaca. La demarcación de la TCO o la eventual autonomía indígena –aunque lejos de ser realidad– podría posicionar a los Guaraníes como beneficiarios vinculados al Estado central. Se facilitaría así una nueva vida territorial para los ex peones Guaraníes, pero también una nueva relación entre las empresas (o sus regalías) y el Estado.⁷

7 Ver mapa en www.ftierra.org. El área no está en producción todavía. Los contratos de 2006 exigieron que la empresa Total invierta por lo menos US\$1.15 mil millones de dólares en este campo y el adyacente, Aquío. Recientemente fue firmado un pre-acuerdo para expandir operaciones exploratorias en el campo Azero al oeste, incluidos el Gazprom, Total y YPFB (Total 2004, 2007, 2008). Antes del conflicto, ya habían disputas fronterizas entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca sobre Incahuasi. Lo de Parapetí reorientaría de alguna forma las tensiones, insertando –muy legítimamente– al Pueblo Guaraní como referente. Hasta hace poco, los beneficios llegaron mayormente a los individuos como el norteamericano Ronald Larsen, quien se benefició financieramente por las actividades de las empresas, pues los campamentos se ubicaron en lo que era su propiedad en la serranía de Incahuasi. Si no fuera poco, anteriormente el bid avanzó sus propias visiones sobre la territorialidad con el etno- eco-turismo, entregando un préstamo enorme a los hacendados (y a Larsen) para hacer mejorías en el marco del proyecto “aciendas del Chaco”, un absurdo neo-colonial que hacía de lo guaraní y lo feudal un objeto turístico y decía poco de la esclavitud y la violencia histórica y actual del latifundio (bid 2002; La Razón 2008).

Pero antes de la era del gas, los Guaraníes ya venían librando una lucha contra las relaciones feudales en las *haciendas* de estos cañones. Allá “adentro” los peones guaraníes vivían en situaciones de trabajo endeudado y fueron considerados como esclavos o comunidades “cautivas”. Las comunidades cautivas no tienen tierras y se quedaron enganchados por la dependencia, el miedo, o la deuda. Hablar de la “liberación” de estas zonas esclavas ha sido un tema central del movimiento guaraní desde los años 80 (Claros Alé, 2008).

Para el Estado y el movimiento Guaraní, la justificación pública para lo del Alto Parapetí convergió no en torno al gas, sino en torno a la esclavitud, un eje que tenía su propia dinámica productiva en la esfera transnacional. En cambio, los ganaderos –en defensa de tierras mayormente malhabidas– sostuvieron que el gas, y no los esclavos era el motivo detrás de las acciones gubernamentales. De cualquier forma la zona del Alto Parapetí se convierte en un foco “productivo” en la nueva geopolítica. Allí, como en Pando, convergen procesos intensificados por la gasificación: son sitios marcados por el reclamo legítimo de los pueblos indígenas, por relaciones semi-feudales y latifundistas, están dotados de recursos naturales, existen bajo la soberanía *de facto* de “poderes locales” violentos, y son reservas de drama social (como la lucha Guaraní, la esclavitud humana y el nefasto feudalismo en pleno siglo XXI) y nacional (la revolución inacabada del ‘52, el sufrimiento histórico del Chaco y el nacionalismo frustrado). Como lugar para hacer soberanía, el Alto Parapetí es una periferia central.

Luego de varias décadas de lucha en torno a las comunidades cautivas, después de 2005 los Guaraníes recibieron ayuda del gobierno para que la esclavitud emerja con fuerza en los medios nacionales y transnacionales. La presión Guaraní sobre el gobierno de Mesa ya había provocado una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Bedoya y Bedoya, 2005). Ahí se detallaban tres focos de trabajo forzoso: Alto Parapetí, Pando y los campos de caña de Santa Cruz. En Alto Parapetí, el gobierno de Mesa trató de resolver el asunto mediante la oferta de crédito individual a los agricultores (un enfoque neoliberal que minaba la visión indígena territorial). Con la victoria del MAS y un renovado empuje Guaraní, el gobierno se ocupó de nuevo de la esclavitud, invitando a la CIDH (Comisión Inter-Americana de Derechos

Humanos), una entidad de la OEA. Esta relación Estado-pueblo indígena fue insólita, pues los pueblos indígenas normalmente recurren ante este órgano en contra de la posición de sus gobiernos (Anaya y Williams, 2001). Su informe (CIDH, 2007) fundamentó las denuncias de trabajo forzoso en Alto Parapetí, tal como lo hicieron varias ONGs nacionales (Defensoría del Pueblo, 2007) y la agencia de desarrollo alemana (DED, 2008). Es más, el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, también viajó a Bolivia e hizo un informe con referencias a la esclavitud de los guaraníes (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2007). A finales de 2007, el Congreso Boliviano votó a favor de adoptar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas. En medio de los conflictos, los propios líderes Guaraníes visitaron las oficinas de CIDH en Washington, D.C., formulando una petición al tribunal para hacer recomendaciones al gobierno boliviano. El representante del Gobierno estuvo presente y aceptó la petición (CIDH, 2008a, b, c).

La triangulación de tácticas mostraba que la soberanía seguía siendo mediada por la “comunidad internacional” como en tiempos neoliberales, pero con matices ideológicos radicalmente distintos y con los movimientos en un nuevo lugar. La colaboración internacional produjo pruebas documentales pero también tuvo peso en los discursos, como algo que hacía revelar realidades y verdades más allá de la polarización nacional. Como dijo Alejandro Almaráz en una conferencia de prensa en Camiri sobre el bloqueo ganadero:

“¿Este es un bloqueo por el latifundio... el saneamiento no supone entrar y avasallar propiedades ... es aplicar un procedimiento legal para verificar la legalidad de documentos y la realidad del cumplimiento de la función económica y social en el predio. Y para evitar eso –revelando culpa– se pretende bloquear la carretera... ¿Por qué [no dejan aplicar la ley aquí], que es justamente el lugar donde la comunidad internacional ha señalado la existencia de peones Guaraní reducidos a relaciones de servidumbre?...” (Vilca, 2008).

Estas frases, pronunciadas entre timbres de celulares, una banda rondando la plaza y cohetes lanzados por algún motivo, ilustraban la posición

mediada del Estado, reducido a la presencia física de una persona entre movimiento indígena, poderes locales y públicos nacionales y transnacionales.

La movilización de los observadores internacionales fue acompañada de medidas legales que redefinieron a Alto Parapetí como zona de excepción. A través de una serie de resoluciones, decretos e informes técnicos, las autoridades armaron un andamiaje jurídico que juntaba el discurso transnacional y la realidad en el terreno.⁸ Los regímenes biopolíticos a menudo hacen de determinados espacios y cuerpos el objeto de medidas excepcionales (Ong, 2005). Sin embargo, aquí la excepción se apuntaba no a cuerpos (como en la biopolítica o la thanatopolítica) sino a territorios y relaciones sociales (la esclavitud). Se trataba de una orientación hacia los significados socio-históricos de la tierra, no hacia la utilidad biopolítica de los sujetos. Se trataba de revertir –mediante la liberación– la condición de “matable” o *nuda vida* que ocupaban algunos Guaraníes. Había entonces que resignificar la violencia en contra de ellos como algo immoral, ilegal y punible. Pero había que hacerlo visible también.

Al frente estaba la oposición reaccionaria. Los ganaderos regionales fortalecieron sus alianzas con los autonomistas y los ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ). Había la publicitada creación de “comités de defensa de la tierra” Los ganaderos en el Parapetí también contrataron –según reportes

8 D.S. 29215 (Agosto de 2007) estableció el marco regulador de la revolución agraria, estableciendo (Artículo 157) que el trabajo forzoso es un criterio por el incumplimiento de función social. D.S. 29292 (Octubre de 2007) estableció el plan inter-ministerial y D.S. 29354, (Noviembre de 2007) declaró una amplia zona de la región Guaraní sujeta a expropiación por causa de utilidad pública. Estos decretos modificaron radicalmente –en términos conceptuales y jurídicos– el decreto emitido por Carlos Mesa dos semanas antes de su dimisión en 2005 (D.S. 28159, 16 de mayo de 2005). El decreto de Mesa trató de consolidar las tierras individuales en Alto Parapetí para ofrecer crédito a las familias “cautivas” para comprar terrenos (50 hectáreas por familia). Esto trató a los guaraníes como trabajadores rurales (bajo la categoría de “familias” o “comunidades” en virtud de las leyes laborales existentes. La estrategia de individualización incluyó –otro absurdo– la delegación de poderes a las élites departamentales para el control de la distribución de la tierra. En 2006, la ley de reforma agraria y los decretos del 2007 invocaron la legislación de los derechos indígenas (nacional e internacional), la categoría de “pueblo” (gente) y dio al poder ejecutivo (Morales) la facultad de determinar los servicios públicos.

locales– miembros de la organización de choque de Santa Cruz, la UJC (Unión Juvenil Cruceñista). Según posteriores testimonios, hombres armados fueron vistos en las estancias ganaderas cerca del campo Incahuasi.

En medio de una creciente tensión, el 26 de febrero de 2008, la oficina local del INRA emitió la resolución para iniciar el catastro. Esta acción determinó la entrada física de un equipo de INRA al Alto Parapetí desde Camiri. Antes que esto sucediera, los ganaderos y la UJC atacaron la oficina. Llevaron al personal del INRA (es decir, el Estado) a las afueras de Camiri y los obligaron a replegarse a Santa Cruz. Después de haber expulsado a los agentes del Estado, los ganaderos reivindicaron la autoría de sus actos a través de su propia resolución escrita, una expresión de para-legalidad. Sostenían que el referéndum autonómico les daría a ellos, y no al gobierno central, el control sobre la tierra (FEGACAM, 2008). Se lee en parte:

RESUELVEN:

“...No permitir ningún trabajo de campo, por parte del INRA porque pretenden aplicar normas inconstitucionales con el único objetivo de confiscar las propiedades productivas y cercenar los territorios municipales para arrebatarle sus regalías. Es así que determinamos el cierre de las Oficinas del INRA. ...Dejamos claramente establecido que si se diera enfrentamientos y derramamiento de sangre, a raíz de las ilegales actuaciones del INRA, los únicos responsables serán lo [sic] funcionarios del INRA y las autoridades agrarias del País.”

Los Guaraníes se encontraban entonces entre un gobierno con poder limitado y con los poderes locales hablando en tonos amenazantes de su derecho de emplear la violencia y determinar la ley. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) respondió con su propia contra-resolución que declaraba la “Reconstitución Territorial de la Nación Guaraní”. A diferencia de los ganaderos, quiénes se veían a si mismos como portadores de la legitimidad *de facto* en contra del Estado, los Guaraníes invocaron a una cadena de leyes nacionales e internacionales desde lo macro (la Declaración de las Naciones Unidas) hasta lo micro (la resolución técnica que había emitido el INRA). Denunciaron a los “OLIGARCAS NEOLIBERALES DE LA DERECHA” y las “violentas acciones” de

los “latifundistas”, y se mostraron a sí mismos como portadores de la “AUTONOMÍA INDÍGENA”, en defensa de sus “derechos constitucionales y derechos humanos para acceder a la tierra y el territorio” (APG, 2008).

Dos días después de la expulsión del INRA, el Viceministro de Tierras viajó a Camiri como un general dirigiéndose a las trincheras. Junto con algunos dirigentes Guaraníes, trató de entrar con un equipo técnico por la ruta norte para iniciar los trabajos, un camino que entra por Lagunillas, donde anduvo en su tiempo el Che. Más adentro, el camino cruza la propiedad de Ronald Larsen, el ahora infame ganadero gringo. Larsen los esperó con un bloqueo, disparó sus neumáticos y los amenazó de muerte. Con la asistencia de otros, los mantuvo cautivos durante casi doce horas. Almaráz se encogió de hombros cuando le pregunté meses después cómo era ser apuntalado con un arma en su propio país por un extranjero. Son grupos sociales en un proceso de desintegración, me dijo. “Ellos adquirieron sus tierras por medio de violencia y la única forma que saben defenderlas es con la violencia... la reforma agraria y la ley son imparables”. Por su parte, el gringo Larsen atrajo la curiosidad del *New York Times* con sus bufonadas. Frente al reportero, él y su hijo se presentaron como propietarios legítimos, enfrentando a un socialista ignorante y chavista (Romero, 2008). Un mes más tarde hubo otro enfrentamiento entre el hijo de Larsen y un equipo del Estado. Imágenes de los hechos entraron en el mundo vía Internet y *Youtube*, apelando a otra visión transnacional con términos como *liberación, esclavitud guaraní, ganaderos americanos, terratenientes y latifundios* (p. ej. Comunica Bolivia, 2008). La guerra por la soberanía en el terreno se libraba como guerra mediática y cibernética al clásico estilo de los movimientos sociales.

En otra escala, la batalla sobre la autoridad –es decir, la soberanía *de jure* y *de facto*– se convirtió en una lucha física para establecer la presencia de actores y cuerpos que representaban el Estado en la región, como el equipo del INRA y Almaráz mismo. Con las conferencias de prensa en la plaza principal de Camiri se vio cómo ocupar espacio –ya sea para una entrevista o para el azotamiento de un abogado Guaraní– era un signo de la autoridad *de facto*. Allí Almaráz llamó a los ganaderos al diálogo pero la UJCasadió su hotel (haciéndolos escapar por detrás). En respuesta, Almaráz hizo su cuartel en el interior de una base militar local.

De allí, los ganaderos bloquearon las carreteras con la esperanza de parar el catastro hasta después del referéndum autonómico. En el bloqueo, los ganaderos exigieron documentos de identidad, según se informó, interrogando en particular a los Guaraníes sobre sus idas y venidas. Estas formas para-estatales de control corporal y espacial hacen eco del poder histórico que disfrutaban los ganaderos en la región, usando tácticas más o menos violentas para mantener a los Guaraníes en su lugar mientras tácticamente rechazaron o se aprovecharon de la autoridad estatal (ver Healy, 1982, para un retrato clásico).

Según los Guaraníes, el ambiente en esos días era de agitación y miedo. En las zonas rurales de Parapetí, los Guaraníes fueron objeto de amenazas para garantizar su silencio. Aquellos tildados como agitadores fueron expulsados de las haciendas. En los pueblos de Camiri, Lagunillas y Cuevo, los ganaderos hostigaron a los dirigentes Guaraníes quienes recordaron que dormían en las oficinas de la organización por temor a ataques, no salían de noche y se tuvieron que trasladar en grupos durante el día. Los activistas Guaraníes que habían ganado durante varias décadas una reñida aceptación como co-ciudadanos en los espacios urbanos como Camiri, fueron ahora cuestionados como traidores a la región. Comentaristas de TV local retrataron a la escuela normal –el INSPOC– donde estudian jóvenes Guaraníes para ser profesores bilingües– como un centro de entrenamiento para la guerrilla. Otros informaron que la compañía telefónica local (Entel, entonces privada), cuyos propietarios fueron descritos como aliados de los autonomistas de Santa Cruz, había pinchado los celulares. “Ellos intervinieron nuestras conversaciones”, me dijo un amigo Guaraní. Nuestro “presidente [el líder Guaraní] constantemente cambiaba de celular”, añadió otro. Llamadas de amenaza fueron recibidas con voces diciendo “cuidáte”. Cuando sugerí a un líder que me parecía como la era de Bánzer, me dijo, “esto fue peor”.

De hecho, estos modos *de facto* de controlar el espacio y los cuerpos, se basaron en un aparato discursivo y social de los “poderes locales” que de larga data controlaba la región. Almaráz, el Viceministro, me dijo unos meses después que el intento de aplicar la reforma agraria no era un problema técnico o jurídico, ni siquiera un problema de la sociedad civil, sino era

fundamentalmente un problema de la estructura del Estado. Parafraseando, describió el Estado local así:

“La alcaldesa [de Cuevo] está casada con un comandante de ejército. El jefe militar local también es un terrateniente. Los fiscales están controlados por los terratenientes. Los propietarios están dispuestos a defender sus tierras a balazos, ya que es la forma en que las adquirieron. La policía está encabronada porque ahora tiene que servir a los indios. Seguro que no ganan mucho, pero se llenan los bolsillos gracias a los poderes locales. [A pesar de que estamos tratando de apoyar las reivindicaciones indígenas] estamos trabajando dentro de una estructura estatal que se construyó para [hacer] el contrario”.

Más allá del acto técnico de evaluar la tierra, lo que estaba en juego era la transformación del Estado como una matriz social y territorial. Esto implicaba tanto demostrar la capacidad técnica para demarcar y redistribuir el territorio como reorganizar la sociabilidad y las redes locales del Estado. Fundar y ejercer soberanía no implicaba simplemente ejercer el control mediante la violencia, o mediante la eliminación de uno u otro cuerpo. De allí vino la necesidad de hacer soberanía de otra forma: al estilo de un movimiento indígena y en el lenguaje de los derechos humanos y la ley. De ahí surge el plan para entrar en la zona con un convoy.

En Cuevo

Varios meses después un joven oriundo de Cuevo me contó –clandestinamente por temor todavía– sobre las decenas de hombres contratados en Santa Cruz quienes habían llegado al pueblo días antes para establecer un campamento en la plaza polvorienta. Allí esperaban la llegada del equipo del INRA, mientras otros esperaban en la entrada del norte. El ganadero Malpartida, según se informó, les pagó un salario diario y contrató a locales para darles alojamiento y comida. Estos hombres tomaban, se drogaban y a veces se peleaban en las noches. También prepararon bombas molotov, organizaron vigilias en la carretera y supervisaron la recolección de piedras. Un vehículo circulaba con altavoz anunciando que los Guaraníes y el MAS venían para asentar Aymaras y Quechuas en la zona. Los profesores de los

colegios locales amenazaron con expulsar a los niños si sus familias mostraban simpatía con el MAS. En la incertidumbre, el pequeño pueblo se embutió en el miedo y muchos se sumaron al bloqueo en contra del saneamiento. De tal forma, Cuevo estaba esperando cuando llegaron los Guaraníes. En muchos aspectos fue una confrontación anunciada.

Esa noche la caravana de camiones y minibuses llegó a las afueras de Cuevo. La emboscada comenzó en la tranca. Cuando visitamos el lugar de los hechos varios meses después, un compañero Guaraní, Kumbay Kañandari Kañani, quien estuvo presente y quien todavía sentía los nervios y el dolor de los eventos, me describió la escena:

“Entonces, entramos normal nomás, por acá en la entrada de Cuevo, sin embargo, allí en la tranca de Cuevo, en la llegadita del pueblo, había unos cuantos señores allí y unas piedras, entonces lo que hicimos es bajar de las movilidades y botar ese montón de piedras que había...estaban con piedras y palos; amenazaban que no saquemos y decimos que estamos pasando que nos vamos a ir por allá y [nos dijeron] que no está permitido; entonces uno de ellos agarró un cohete y lanzó pues, paaaa, hizo sonar el cohete, y aparecieron los otros, ya con palos y piedras, y pasó el primer camión y comenzó la pedrada... nos llovían las piedras...allí fue [donde] llevaron a Ramiro [el abogado]...”

Los camiones pasaron adelante para escaparse de ese punto por el borde del pueblo y salir al campo nuevamente. Pero la otra salida había sido bloqueada por un tractor. Planeado para que el convoy tuviera que parar en un punto estrecho en una curva inclinada, los pueblerinos atraparon a los guaraníes en un pincer. Decenas de personas estaban parapetadas a los lados del camino y las piedras llovieron. Los guaraníes fueron obligados a bajarse y sus vehículos fueron destrozados y saqueados. Contaba mi compañero:

“[Queríamos hablar], y había las señoras, mujeres, hombres allí con machete, y dialoguemos decíamos, y al que estaba adelante, con el machete quería cortar [a uno de nosotros] ... las señoras gritaban [y nosotros] ‘queremos dialogar’, y ya no más con las piedras por aquí, mujeres traían piedras en canasta... las piedras estaban listas, las piedras estaban amontonadas, porque lo único que hacían era tirar y alzar; alzaban y tiraban, alzaban y tiraban... no podíamos salir; la quebrada [indica a un lado], un atajado [al otro], a este lado el alambrado...no respetaron nada.”

Alejandro Almaráz, el Viceministro de Tierras también presente, recordó diciendo que no se trataba de un *enfrentamiento*, que a pesar de haber esperado poder eludir el bloqueo, se había cortado “nuestro retiro.” Fue un “*escarnio*, un *escarmiento*. Tomaron [a los guaraníes] fuera de los vehículos y los golpearon. Fue allí donde vimos armas largas”.

Los guaraníes se escaparon como pudieron. Algunos lograron huir en los vehículos dañados hacia la carretera. Fueron confrontados por grupos de ganaderos a lo largo de la carretera. Un grupo fue obligado a bajarse de su vehículo “a poner las manos arriba, como *maleantes*”. Una vez en la carretera, vagonetas llenas de jóvenes pasaron de arriba y abajo acosándolos, gritando, “¡Los vamos a cagar!” Algunos Guaraníes caminaron veinte o treinta kilómetros buscando cómo retornar a Camiri. Llegaron a sus oficinas en medio del llanto de los compañeros que habían recibido la noticia.

En un momento del recuento, nos paramos en el sitio de la pedrada y me señalaron el alambrado que bordeaba la carretera:

“se daban la vuelta así y hemos visto tipos apostados allí en el montecito, tras del alambrado, y esos no estaban nomás con piedritas, estaban armados, reconozco un muchacho, hemos jugado [fútbol] con él en Cuevo ¿no? Estaba con dos armas! cuando le enfocó [la luz del camión] y lo más triste es que algunos conocidos, profesores, autoridades, que según ellos ¿no? están formando una nueva generación para un sociedad más justa estaban allí también... esa es la cosa más triste, gente que conocemos, maestros, funcionarios de distrito [...] [ellos] estaban involucrados en esto... podría ser peor... [pero] la pelea no era con Cuevo, no es con la gente... es una lástima, da pena no, que la gente, una gran cantidad de personas, se bagan convencer por unos cuantos”.

No hubo muertos, pero el trauma fue palpable en las lágrimas y el miedo todavía presente varios meses después. Fue una muestra de lo fácil que es destruir una fábrica social muy sensible y romper con una cultura de diálogo público que venía emergiendo en la zona.

La alcaldesa de Cuevo, una profesora y protagonista de la emboscada, más tarde acertó que los Guaraníes llevaban armas y “asaltaron’ el pueblo”. Dirigentes cívicos de Santa Cruz, en apoyo a las élites provinciales, también se refirieron al intento de los Guaraníes de pasar a través de Cuevo como un acto de “agresión armada” (El Deber, 2008a, 2008b). De hecho, los

guaraníes no ofrecieron resistencia y sólo había entre ellos unas hondas, machetes y palos, es decir, equipos destinados al trabajo de saneamiento. No se informó de lesiones por el lado de los ganaderos, ni de violencia por parte de los guaraníes.

A pesar del trauma colectivo, y las lágrimas que venían cuando lo recordaron, los Guaraníes se justificaban mediante invocaciones de la ley y la historia:

“...perdimos todo... no puedo decir la hora que hemos llegado pero estaba de madrugada, entonces con toda la gente estaba allí [en Camiri] con mucha tristeza [aquí su voz rompe] pero, al menos no tuvimos pérdidas humanas... sin embargo estamos firmes y no vamos a desmayar, no, porque no es algo ilegal que estamos haciendo, es algo que por derecho y por historia, es una reivindicación que estamos buscando, que se nos tome también como bolivianos, no... cuando se trata de hacer respetar, de brindar las cosas que por derecho, allí [nos tratan como si] no somos bolivianos, somos extranjeros...”

Como en otras entrevistas, estas violencias espectaculares de forma punitiva se caracterizaban explícitamente por los Guaraníes en términos que recordaron relaciones coloniales históricas (violación, secuestro, masacre, escarnio, escarmiento). Al ser tratados como “delincuentes” y “extranjeros” ilustraron cómo el poder local había construido a los Guaraníes como doblemente sujetos a la violencia legítima: seres raciales inferiores y criminales. La soberanía *de facto* se constituyó encima de estos cuerpos vistos como fuera de, o “antes de la institución de la ley” (Das y Poole, 2004:12). Sin embargo, estas violencias, alguna vez ocultas por la colusión *de jure* del Estado, ahora se revelaron en la espalda del abogado y las palabras de los presentes. Un orden se desmantela y otro surge a través de la revelación táctica y transnacional del sufrimiento Guaraní.

Las consecuencias

El antropólogo Talal Asad sugiere que los Estados siempre están tratando de “superar el margen”, aquellos espacios en los que la ley estatal es débil,

embarrada por el incompleto control sobre el espacio o sus sujetos, o frustrados por desajustes entre la ley legible (visible) y la ilegible (o invisible) de la práctica real (2004: 279, 297). Sin embargo, el caso de Bolivia no sólo implica intentos de formalizar la ley. Implica transformar –hasta cierto punto– relaciones estructurales de poder y territorio. Las acciones de los Guaraní y las estrategias del Estado reflejan un patrón más amplio de la práctica de movimientos sociales similar a la observada por Suzana Sawyer en Ecuador (2007). Según Sawyer, la reestructuración del Estado legado por el neoliberalismo es protagonizado no por una utopía anárquica de multitudes al estilo Hardtiano sino por una reafirmación del Estado a través de “prácticas que afirman la propia existencia y afirmación del afianzamiento de la ley (24)”. La Bolivia contemporánea ofrece un caso en el que el vacío de la ley produce dramaturgias espectaculares –tanto de la élite como de los movimientos– que forman parte de una compleja estrategia transnacionalizada de reestructurar el Estado y la ley desde abajo.

Las historias y los cuerpos de los Guaraníes se transformaron en evidencias forenses para acusar moralmente y legalmente a los poderes locales (ver Viceministerio de Tierras, 2008a, b, c).⁹ Los ganaderos –desde Larsen a Malpartida– jugaron perfectamente sus roles, ejerciendo una violencia colonial que atrajo el desprecio público en el ciberespacio de los derechos humanos. Como tal, aquellos que alguna vez fueron sujetos “castigables” o “matables”, sometidos a la violencia impune, se convirtieron a través de la práctica del movimiento, testigos transnacionales y acciones legales del gobierno en una formación colectiva socio-territorial validada por la ley

9 Estos eventos son parecidos a lo que Doug McAdam (1996) llama la “dramaturgia estratégica” de los movimientos negros en la época de la lucha de los derechos civiles de EE.UU. Las marchas de los activistas fueron planeadas en lugares estratégicos como Alabama en la década de 1960 – tal como en Sucre, Cuevo y Pando de los 2000s – donde se suponía que los poderes locales responderían con brutalidad. Según McAdam, las marchas “cortejaron la violencia [de los racistas blancos], mientras que evitaron la violencia” ejercida por sus propios activistas (349). Así con imágenes de la brutalidad blanca ejercida sobre cuerpos negros, pudieron movilizar la simpatía de distintos públicos nacionales e internacionales, avanzando el estatus moral del movimiento negro y sus reclamos para un legalidad nueva ante la inmoralidad de la legalidad de facto del régimen racista. Agradezco a José Antonio Lucero por la referencia.

y articulada con los nuevos llamados oficiales a la descolonización (pluri) nacional. En el Parapetí, fueron los cuerpos heridos Guaraníes que se mostraron para hacer Estado y soberanía nueva. Si lo de Pando condujo a la caída de la media luna y lo de Sucre a la constitución, lo de Parapetí hizo avanzar la Reforma Agraria, todas ganadas sobre la visibilidad de cuerpos indígenas y populares violentados. Ojalá esto refleje el fin del orden antiguo para dar paso a otras formas de soberanía de intercambio y articulación de pluralidades. Sacrificar a los pueblos en nombre del progreso antes era aceptable, ahora ya no.

Aún simpatizando con el proceso de cambio, hay que señalar los riesgos éticos y políticos de estas tácticas y de su representación. Como señala John Peffer (2008) en relación a la lucha contra la esclavitud en el Congo, la circulación de imágenes de cuerpos latigados tiene una larga historia en la labor a favor de los derechos humanos. Sin embargo, implica una especie de “voyeurismo” con el fin de producir una díada de la humillación (en Bolivia, que une tanto a las víctimas y el *pueblo* nacional) y la salvación (en este caso a través del ejercicio de la ley). La búsqueda de la simpatía pública arriesga “más abyección, objetivación e instrumentalización de la imagen del cuerpo [indígena]” (Peffer, 2008: 55). Los Guaraníes afrontaron estos riesgos con consecuencias reales en su articulación con las tácticas del gobierno. Como observadores podemos solidarizarnos con los movimientos y el proceso sin perder de vista la importancia de no obviar y olvidar la lucha histórica y territorial de los Guaraníes para la descolonización.

En 2009, el Director del INRA, Juan Carlos Rojas (también herido en Cuevo) anunció la finalización de la primera fase del relevamiento en el Alto Parapetí. Cuatro propiedades fueron identificadas para la expropiación, incluidas dos de los Larsens y una de Malpartida. Cincuenta familias Guaraníes iban a recibir estas tierras (Erbol, 2009). Los inspectores también validaron la tenencia de tierra de numerosos terceros no-Guaraníes. Por su parte, los ganaderos siguen llamando a la “desobediencia civil,” pero, como señala un funcionario del INRA, ya tendrán que defenderse en el “marco jurídico” de la ley (Rojas, 2009). El gas subyace bajo tierra. En medio de posibilidades y presiones, una nueva territorialidad se emerge en el oriente boliviano.

Bibliografía

- ACOSTA, Alberto
2009 *La maldición de la abundancia*. Quito, Abya Yala.
- AGAMBEN, Giorgio
1998 *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford, Stanford University Press.
- ANAYA, James y Robert WILLIAMS
2001 “The Protection of Indigenous Peoples’ Rights to Land and Natural Resources under the Inter-American Human Rights System”. *Harvard Human Rights Journal* vol. 14, págs. 33-86.
- APTER, Andrew
2005 *The Pan-African Nation: Oil and the Spectacle of Culture in Nigeria*. Chicago, University of Chicago Press.
- ASAD, Talal
2004 “Where Are the Margins of the State?” En Das and Poole, eds. Pp. 279-288.
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (bid)
2002 BO0174 Sustainable Tourism Development Program. <http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?project=BO0174>.
- BARRY, Andrew
2006 “Technological Zones”. *European Journal of Social Theory* vol. 9, no. 2.
- BEDOYA GARLAND, Eduardo, y BEDOYA SILVA SANTIESTEVEAN, Álvaro
2005 “Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia”. Organización Internacional del Trabajo. Génova: ILO.
- CIDH (Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos)
2007 “Access to justice and social inclusion: Strengthening Democracy in Bolivia”. Documento electrónico, <http://www.cidh.org/pdf%20files/BOLIVIA.07.ENG.pdf>.
- 2008a “IACHR Concludes Visit to Bolivia”. Documento electrónico, <http://www.cidh.org/Comunicados/English/2008/26.08eng.htm>.

- 2008b “Hearing on Captive Communities”. Documento electrónico, <http://www.cidh.org/Audiencias/131/situacion%20derechos%20humanos%20en%20comunidades%20cautivas%20bolivia.mp3>.
- 2008c “Memorandum of Commitment: Hearing on Captive Communities, March 11, 2008”. Documento electrónico. http://www.cidh.org/pdf%20files/cautivas_ingles_comunicado.pdf.
- CLAROS ALE, Yandira
- 2008 “Los Guaraníes: esclavos del siglo XXI”. *Erbol*. <http://www.erbol.com.bo/reportaje.php>.
- COMUNICA BOLIVIA
- 2008 “Terratenientes atacan a funcionarios de Gobierno Boliviano”. Youtube. <http://www.youtube.com/watch?v=QwCANjvxZdQ>, 9 abril.
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- 2007 “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen”. Asamblea General de las Naciones Unidas. A/HRC/6/15. Diciembre 11.
- CORONIL, Fernando
- 1997 *The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela*. Chicago, University of Chicago Press.
- DAS, Veena, y Deborah POOLE, eds.
- 2004 *Anthropology in the Margins of the State*. Santa Fe: SAR Press.
- DE LA FUENTE JERIA, José
- 2005 “Explotación petrolera en Tierras Bajas e indígenas: neoliberalismo, reforma estatal, medio ambiente y nueva ley de hidrocarburos”. En Paz, ed., Pp. 97-149.
- DEFENSOR DEL PUEBLO
- 2007 “Servidumbre y Empatronamiento en el Chaco”. *Derechos Humanos y Acción Defensorial*. Año 2, N° 2. Pp. 219-232.
- DED (DEUTSCHER ENTWICKLUNGSDIENST)
- 2008 “Familias Guaraní Empatronadas – Análisis de la Conflictividad”. La Paz: DED.

EL DEBER

2008a “Gobierno frena intento de sanear; presión sube”. 15 Abril.

2008b “Cívicos asumirán defensa de la tierra”. 15 Abril.

ERBOL

2009 “INRA revertirá diez predios en la TCO Alto Parapetí por existir relaciones de servidumbre”. *Erbol*. www.erbol.com.bo (La Paz). 5 de enero de 2009.

FEGACAM (Federación de Ganaderos de Camiri)

2008 “Resolución de los ganaderos del Chaco Boliviano”. Mimeo.

FOUCAULT, Michel

1976 *Histoire de la sexualité. T. I, La volonté de savoir*. Paris, Editions Gallimard.

GARCÉS V., Fernando

s/f “La domesticación de las autonomías indígenas en Bolivia: de la propuesta del Pacto de Unidad a la nueva Constitución Política del Estado”. Mimeo.

GUSTAFSON, Bret

2009 *New Languages of the State: Indigenous Resurgence and the Politics of Knowledge in Bolivia*. Durham, Duke University Press.

2008 “Espectáculos de Autonomía y Crisis: O, lo que los toros y las reinas tienen que ver con el regionalismo en Bolivia”. *Revista Willka* vol. 2, no. 2.

HANSEN, Thomas Blom, y Finn STEPPUTAT

2006 “Sovereignty Revisited”. *Annual Review of Anthropology* vol. 35.

HEALY, Kevin

1986 *Caciques y patronos: experiencias de desarrollo rural en el sud de Bolivia*. Cochabamba, CERES.

HERNAIZ, Irene

2002 *Concentración de la tierra: Casos de doble dotación, tráfico de influencias, incumplimiento de la condición de dotación, latifundios y acaparamiento de tierras*. La Paz, Fundación Tierra.

KARL, Terry

1997 *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. Berkeley, University of California Press.

KAUP, Brent

2008 “Negotiating Through Nature: The Resistant Materiality and the Materiality of Resistance in Bolivia’s Natural Gas Sector”. *Geoforum* vol. 39, no. 5.

LA RAZÓN

2008 “Como vivir al modo chaqueño en una hacienda”. *La Razón*, September 17. <http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia24637.asp#>.

MARCOSTV

2008 “Periodistas agredidos en Alto Parapetí”. Video digital, <http://www.youtube.com/watch?v=-uv7asuYitY&NR=1>. Septiembre, 23, 2008.

MCADAM, Doug

1996 “The Framing Function of Movement Tactics: Strategic Dramaturgy in the American Civil Rights Movement”. In McAdam, D., J.D. McCarthy, and M.N. Zald, eds. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*. Cambridge, Cambridge University Press. Pp. 338-57.

ONG, Aihwa

2006 *Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Durham, Duke University Press.

PAZ PATIÑO, Sarela, ed.

2005 *Territorios indígenas y empresas petroleras*. Cochabamba, CESU/CEIDIS/CENDA.

PEFFER, John

2008 “Snap of the Whip/Crossroads of Shame: Flogging, Photography, and the Representation of Atrocity in the Congo Reform Campaign”. *Visual Anthropology Review* vol. 24, no. 1.

PRADA, Raul

2007 “Articulaciones de la complejidad: Estado Plurinacional”. <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007022803>.

ROJAS, Fernando

2009 “Sectoros dan respaldo pleno a productores”. *El Deber*, Febrero 10.

- ROMERO, Simon
 2008 “American Rancher Resists Land Reform Plans in Bolivia”. *New York Times*, May 9.
- SAWYER, Suzana
 2007 “Empire/Multitude – State/Civil Society: Rethinking Topographies of Power Through Transnational Connectivity in Ecuador and Beyond”. *Social Analysis* 51(2):64-85.
- SOLIZ RADA, Andrés
 2007 “Entre petroleras y ONG”. *Bolpress*, Diciembre 18.
- TARIJA LIBRE
 2008 “Acusan a hacendados de amenazar a guaraníes para que no los denuncien”. *Tarija Libre*. <http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com/2008/04/acusan-a-hacendados-de-amenazar-a-guaranies-para-que-no-los-denuncien/>.
- TOTAL OIL (www.total.com)
 2004 “First gas discovery in Bolivia’s Ipati block”. Total Corporate Website Comunicado de Prensa, Octubre 11, http://www.total.com/en/press/press_releases/pr_2004/041011_bolivia_5593.htm.
- 2007 Total in 2007. http://www.total.com/static/en/medias/topic2346/Total_2007_total_in_2007.pdf.
- 2008 “Total, Gazprom and YPFB sign Cooperation Agreement to Explore Azero Block in Bolivia” Total Corporate Website Comunicado de Prensa, Septiembre 19, 2008. http://www.total.com/en/press/press_releases/pr-2008/080918-bolivia-gazprom-YPFB-azero-block_16963.htm.
- URIOSTE, Miguel
 2009 “Reforma Agraria: avances y limitaciones”. La Paz: Fundación Tierra. http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=200.
- VALDEZ ROMERO, Miguel, y ROJAS, Juan Carlos
 2003 “A medio camino: Reforma Agraria en el Chaco”. *Revista Artículo Primero* 14:349-364.

VICEMINISTERIO DE TIERRAS

- 2008a “Resumen de los hechos violentos acaecidos en contra del Pueblo Guaraní y de Funcionarios públicos”. Mimeo.
- 2008b “Actividades realizadas para el saneamiento, reversión y expropiación de tierras en favor de comunidades guaraníes cautivas”. Mimeo.
- 2008c “Antecedentes históricos de la ocupación territorial del Pueblo Guaraní del Alto Parapetí”. Mimeo.

VILCA, Nelson

- 2008 “Entrevista de nelson vilca: guarani esclavos en Camiri”. Youtube. <http://www.youtube.com/watch?v=id3QoWqQdno>.

WATTS, Michael

- 2004 “Antinomies of Community: Some Thoughts on Geography, Resources, and Empire”. *Transactions of the Institute for British Geography* vol. 29, pp. 195-216.

ZALIK, Anna

- 2009 Zones of Exclusion: Offshore Extraction, the Contestation of Space and Physical Displacement in the Nigerian Delta and the Mexican Gulf. *Antipode* 41(3):557-582.